

Acceder a documentos de ayuntamiento por ciudadanos

La consulta plantea si la petición efectuada por un particular descrita en la consulta vulnera la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

Como cuestión previa, debe recordarse que el artículo 2.1, párrafo primero de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “la presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”, siendo datos de carácter personal, conforme al artículo 3 a) “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

De dichos preceptos se deduce claramente que la protección conferida por la Ley Orgánica 15/1999 no es aplicable a las personas jurídicas, que no gozarán de ninguna de las garantías establecidas en la Ley, sin perjuicio de que los Tribunales puedan atender las reclamaciones de responsabilidad que pudieran exigirse en el caso de que el uso de información relativa a las empresas les cause algún perjuicio. En consecuencia, las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999 no serían de aplicación a los datos referidos a personas jurídicas.

En consecuencia, sólo podemos analizar si pueden ser comunicados los datos relativos a una persona física. Según se desprende de la documentación adjuntada, tan sólo se solicita información respecto de una ciudadana, más concretamente “los decretos y notificaciones con justificantes de entrega de los expedientes de disciplina urbanística iniciados a dicha ciudadana”.

Con carácter general, y en la medida en que la entrega de la documentación señalada constituye, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 i)

de la Ley Orgánica 15/1999, una cesión de datos de carácter personal, definida como “Toda revelación de datos efectuada a persona distinta del interesado”.

Por su parte, el artículo 11.1 de la misma Ley establece que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”, quedando exceptuado el consentimiento en aquellos casos en que así lo prevea una Ley.

En este sentido, el artículo 31 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, delimita jurídicamente el concepto de interesado en el procedimiento administrativo, indicando a tal efecto que se considerarán como tales en el procedimiento “a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva”.

A su vez, el artículo 35.a) de la misma Ley recoge el derecho de los ciudadanos a “A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos”.

Siguiendo con el contenido de la Ley, el apartado tercero y cuarto del artículo 37 relativo al derecho de acceso a archivos y registros, señala lo siguiente:

“3. El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del Derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo.

4. El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una ley, debiendo, en estos casos, el órgano competente dictar resolución motivada.”

Es decir, por aplicación de los principios establecidos en la Ley 30/1992, el acceso a los documentos de carácter nominativo podrá ser ejercido por un tercero siempre y cuando acredite un “interés legítimo y directo” que justifique la cesión, a juicio de la Unidad responsable de resolver, habida cuenta que será una norma con rango de Ley (la propia Ley 30/1992) la que posibilite la cesión cuando concurren determinadas circunstancias, pero en ningún caso podrán comunicarse datos de carácter sancionador.

En consecuencia, podemos afirmar que la Ley Orgánica 15/1999, no resulta aplicable a los datos relativos a las personas jurídicas, y respecto de los datos de carácter sancionador relativos a una persona física no podrán comunicarse a un tercero, tenga o no interés legítimo.